Tema 10

El Poder Judicial y el Sistema de Justicia

1. Naturaleza del Poder Judicial.- 2.- Independencia y autonomía del Poder Judicial. Financiamiento del Sistema de Justicia.- 3. Carrera judicial.- 4.- Responsabilidad judicial.- 5. Principios que regulan el proceso.- 6. Control de la constitucionalidad.- 7. Organización del Sistema de Justicia.- 7.1. Jurisdicción de paz.- 7.2. Medios alternativos de justicia.- 7.3. Jurisdicciones especiales.- 7.4.- El Tribunal Supremo de Justicia.- 7.4.1. Integración.- 7.4.2. Atribuciones.- 7.4.3. Requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.- 7.4.4. Periodo, procedimiento de designación y remoción de los magistrados.- 7.5. El sistema penitenciario.- Apéndice.- Bibliografía

1. Naturaleza del Poder Judicial

Concebir la democracia sin un Poder Judicial que funcione es una quimera. La administración de justicia es el fundamento mismo de la democracia. La democracia moderna funciona sobre la idea del Estado de derecho y éste exige el funcionamiento de la Justicia. “La verdadera fortaleza de una democracia radica en la existencia de un Poder Judicial que funcione en la práctica y en cuya independencia y eficacia tengan fe los ciudadanos”.¹

En una democracia moderna los poderes Ejecutivo y Legislativo deben estar subordinados en su conformación y actuaciones al principio de gobierno de la mayoría con respeto de la minoría. El Poder Judicial, por el contrario, debe responder al principio de independencia y autonomía para permitir a los jueces ejercer sus funciones imparcialmente de acuerdo a su ciencia y conciencia.

La Constitución de 1999 al establecer la supremacía constitucional,² vinculó tanto a los órganos del Poder Público como a los particulares, con los valores de libertad, igualdad y dignidad humana, otorgándole al órgano jurisdiccional la obligación de brindar la tutela judicial efectiva, con lo cual se asigna un rol esencial en la sociedad al Poder Judicial como tutor de los derechos fundamentales del ser humano.

Corresponde al Poder Judicial dirimir en forma imparcial, transparente, independiente, expedita, sin formalismos ni reposiciones inútiles, las controversias entre los particulares, entre éstos y el Estado y entre los distintos órganos de éste.³ Los tribunales deben ejercer, aunque no lo hacen en forma exclusiva, la función jurisdiccional, que etimológicamente significa “decir el derecho”. El juez va a decidir para resolver conflictos entre las partes, cuál es la norma jurídica aplicable al caso concreto.⁴ Los órganos del Poder Judicial conocen de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinan las leyes, y ejecutan y hacen ejecutar sus sentencias. Dispone la Constitución que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.⁵

¹ RENGEL-ROMBERG, Arístides: “*La Profesionalización de los Jueces*”, Autolitho, C.A., Caracas, 2006, 50.

² “*Exposición de Motivos. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*”, G.O. N° 5453 Ext. del 24.03.00, p. 17. Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.

³ MOLINA GALICIA, René: “*Reflexiones sobre una visión constitucional del proceso, y su tendencia jurisprudencia*”, Ediciones Paredes, Caracas 2002, p. 16.

⁴ LA ROCHE, Humberto: “*Derecho Constitucional*”, Universidad del Zulia, Maracaibo, 1970, p. 143.

⁵ Exposición..., ob. cit. p. 34. Artículo 253.

2. Independencia y autonomía del Poder Judicial. Financiamiento del Sistema de Justicia

El Poder Judicial debe ser independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozar de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado debe asignarse al Sistema de Justicia, para su efectivo funcionamiento, una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional,⁶ es decir, el presupuesto del Poder Judicial cuya elaboración y ejecución corresponde al Tribunal Supremo de Justicia,⁷ puede obviamente ser alterado por la Asamblea Nacional al igual que cualquiera de las partidas presupuestarias.⁸

Este situado judicial corresponde al Sistema de Justicia en su conjunto y, como ya se dijo, puede ser modificado por el Poder Legislativo. De tal manera que la nueva disposición constitucional, tan publicitada y favorablemente ponderada por los constituyentes de 1999, es en el mejor de los casos un lineamiento de política deseable que en todo caso constituye una obligación al presentar el Poder Ejecutivo el proyecto de Ley de Presupuesto a la Asamblea Nacional, lo cual por supuesto no garantiza su aprobación definitiva. En todo caso, el porcentaje señalado queda por debajo del establecido en la Constitución hondureña de 1982⁹ o en la paraguaya de 1992¹⁰ y del mínimo del cinco por ciento sugerido para el Poder Judicial, Ministerio Público y policía por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).¹¹

Desde el año 2000 el Presupuesto del Sistema de Administración de Justicia se ha venido incrementado en relación con el Presupuesto Ordinario Nacional llegando a ubicarse en 2,46% en 2002, disminuyendo en 2003 y 2004, para recuperarse en 2005. La participación en 2004 fue del 2% del total, y en 2005 del 2,49% del Presupuesto Ordinario Nacional, la más elevada participación desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999.¹² Para el periodo 2006-2007 se mantiene por encima del 2% de los ingresos ordinarios, aun cuando no repercute en una prestación eficiente del servicio.¹³

Dispone la Constitución que “El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios”.¹⁴ Esta disposición es innecesaria habida cuenta del principio

⁶ Exposición..., ibídem. p. 34. Artículo 254.

⁷ Exposición..., ibídem. p. 35. Artículo 267.

⁸ Exposición..., ibídem. p. 39. Artículo 313. La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley... La Asamblea Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias...

⁹ “*Constituciones Latinoamericanas*”, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 1997, p. 567. Artículo 306. El Poder Judicial tendrá una asignación anual no menor del tres por ciento del Presupuesto de Ingresos Netos de la República, excluidos los préstamos y donaciones.

¹⁰ Constituciones..., ibídem, p. 776. Artículo 249. De la Autarquía presupuestaria. El Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria. En el Presupuesto General de la Nación se le asignará una cantidad no inferior al tres por ciento del presupuesto de la Administración Central.

¹¹ “*Programa...PROVEA Informe Anual2004-2005*” consultado en www.derechos.org.ve.

¹² Programa...2004-2005..., ibídem.

¹³ “*Programa...PROVEA Informe Anual2006-2007*” consultado en www.derechos.org.ve.

¹⁴ Exposición..., ob. cit. p. 34. Artículo 254.

constitucional *nullum tributum sine lege*¹⁵ que reserva tal atribución al Poder Legislativo. Pareciera, que el constituyente lo que quiso fue reconocer el carácter gratuito de la justicia ya contemplado en el artículo 26 de la Constitución.¹⁶ En nuestra opinión, la gratuidad como está concebida no garantiza el acceso a la justicia de la mayoría de los venezolanos que viven en condiciones de pobreza. Para hacer efectiva la justicia gratuita, la asistencia de profesionales del derecho tendría que estar al alcance de todos y las decisiones judiciales dictarse con celeridad para lo cual sería indispensable la creación de mayor número de tribunales lo cual supone adecuado presupuesto.

3. Carrera Judicial

Para La Roche la carrera judicial “es el conjunto de normas, de principios constitucionales y legales que se dan con el objeto de lograr la estabilidad de los magistrados encargados de administrar justicia y de preservarlos contra las influencias de los otros poderes y de los mismos particulares”.¹⁷ La carrera judicial constituye la piedra angular de un Poder Judicial independiente. Los principios que deben informar la carrera judicial son inamovilidad, independencia, ascenso e irreductibilidad del sueldo.

Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados, los jueces; los fiscales del Ministerio Público; y los defensores públicos, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpósita persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas. Tampoco podrán los jueces asociarse entre sí.¹⁸

El cumplimiento de este importante requisito, y de las disposiciones fundamentales que conforman el Estado de derecho democrático, es absolutamente incompatible con el proyecto político que en Venezuela desarrolla el régimen imperante que exige subordinación y adhesión político partidista. En tal sentido, observamos el bochornoso acto de apertura del Año Judicial 2006, donde un grupo mayoritario de los jueces presentes, sin limitación, amonestación o reclamo alguno, coreó una conocida consigna política a favor del Presidente de la República: ¡Uh, ah, Chávez no se va!¹⁹ Ante el repudio de parte del foro y de la Academia al acto de proselitismo político, el entonces Presidente del Tribunal Supremo, Omar Mora, minimizó la importancia de la impropia conducta afirmando que se trataba de una simple manifestación de la alegría reinante.²⁰

Por otra parte, para que el activista político, gremial o sindical, pueda desempeñar una función judicial, basta con la formalidad de una renuncia a la militancia política partidista, gremial o sindical, para que a partir de entonces, como haría el diputado Luis Velásquez Alvaray antes de ser nombrado

¹⁵ Exposición..., ibídem. p. 39. Artículo 317. No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes...

¹⁶ Exposición..., ibídem. p. 18.

¹⁷ La Roche (1970)..., ob. cit. p. 161-162.

¹⁸ Exposición..., ob. cit. p. 34. Artículo 256.

¹⁹ Diario El Universal, 27.01.06.

²⁰ Diario El Universal 01.02.06, “Lamentan que jueces griten: “¡UH, AH, Chávez no se va!””

Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, se considere cumplido el requisito exigido.²¹ Se trata simplemente de una conducta fraudulenta donde se desconoce el fin de la norma constitucional.

Dispone la Constitución²² que “El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces debe hacerse por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y deberán ser seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces. Los jueces sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley.”

La profesionalización de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, mediante la formación y capacitación continua corresponde a la Escuela Nacional de la Magistratura, que depende jerárquica, organizativa y funcionalmente de la Sala Plena de Tribunal Supremo de Justicia, la cual debe mantener estrechas relaciones con las universidades del país y demás centros de formación académica. Las políticas, organización y funcionamiento de esta institución, así como sus orientaciones académicas, son dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.²³

De acuerdo a estadísticas oficiales, recogidas en el Informe Anual 2005-2006 de PROVEA, el número de jueces en Venezuela para abril de 2005 era de 1.820. Según declaración de prensa de Omar Mora Díaz, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en mayo de 2005, la provisionalidad de los jueces en el sistema judicial venezolano alcanzaba el ochenta y uno por ciento, sin embargo se anunciaba que para octubre de 2006 la totalidad de los jueces serían titulares. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe correspondiente al 2004, expresaba su preocupación por la suspensión del proceso de concursos judiciales y la profundización y aumento del problema de la provisionalidad desde que se inició en Venezuela el proceso de reestructuración del Poder Judicial. Durante este periodo ha sido práctica reiterada la destitución masiva de jueces, habiendo sido reconocida hasta por el propio Presidente del Tribunal Supremo la influencia política para su despido y escogencia.²⁴

Según el Informe Anual 2006-2007 de PROVEA “continúa la provisionalidad de los jueces, aunque no existe información precisa en cuanto a su magnitud. Hasta el último trimestre del año 2006, el TSJ ubicaba la provisionalidad en un 10%... al contrario existen otros datos que permiten ubicarla en el 45%... La disminución de jueces provisorios no ha sido producto de concursos de oposición constitucionalmente establecidos, sino de un Programa Especial de Capacitación para regularizar la titularidad”²⁵

²¹ Tristemente célebre, Luís Velásquez Alvaray. Constituyente en 1999. Electo diputado en 2000 y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia a partir de 2004. Artífice de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia sería una de sus víctimas. Acusado de corrupción sería suspendido por el Consejo Moral Republicano y luego destituido, sin derecho a la defensa, por la Asamblea Nacional. El Universal 08.06.06, “*Acto del concejo moral acepta amparo*”. Cazador casado por su propia ley, diría el diputado Gerardo Blyde, El Universal 25.05.06, “*Blyde: Se le aplico la norma a quien fue su artífice y su defensor*”. ¿Justicia o ajusticiamiento? se preguntaba el jurista Alberto Arteaga Sánchez en El Universal 14.06.06, “*¿Justicia o ajusticiamiento de Velásquez Alvaray?*”.

²² Exposición..., ob. cit. p. 34. Artículo 255.

²³ “*Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia*”. G.O. N° 37.942 del 20.05.04. Artículo 17.

²⁴ Programa...PROVEA Informe Anual 2004-2005..., ob. cit.

²⁵ Programa...2006-2007..., ob. cit.

4. Responsabilidad judicial

Los jueces son personalmente responsables, en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación,²⁶ parcialidad²⁷ y por los delitos de cohecho²⁸ y prevaricación²⁹ en que incurran en el desempeño de sus funciones.³⁰ La Constitución³¹ establece que toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados quedando a salvo el derecho de los particulares de exigir la responsabilidad personal del juez o magistrado; y el derecho del Estado de actuar contra éstos. De tal manera, que son éstas las únicas causales de responsabilidad del Estado vinculadas a la actuación del Poder Judicial.³²

Para Sarmiento Sosa, la ignorancia y la negligencia constituyen error judicial cuando, aun no habiendo la intención manifiesta, la actuación resulta ostensiblemente contraria a una norma legal expresa, o haya incumplido algún trámite o formalidad que legalmente haya sido ordenado bajo pena de nulidad. Citando a Abreu, dice que se trata de aquel supuesto en el cual el juez no corrige los defectos de una actuación judicial o que, por su culpa, se omite una resolución debida, causándose, en la persona del justiciable o en sus bienes un daño que debe ser reparado.³³ Mala praxis sería todo acto o hecho culposos de acción u omisión no permitido por el ordenamiento jurídico, realizado por un juez en el ejercicio de la administración de justicia, que causa un daño directo a cualquier persona vinculada a un proceso judicial.³⁴

²⁶ “Código de Procedimiento Civil”. G.O. N° 4.209 Ext. del 18.09.1990. Artículo 19. El juez que se abstuviere de decidir so pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de la ley, de oscuridad o de ambigüedad en sus términos, y asimismo, el que retarde ilegalmente dictar alguna providencia, será penado como culpable de denegación de justicia”. “Código Penal”, G.O. N° 5.494 del 20.10.00, reformado en G.O. N° 5.763 Ext. del 16.03.05, reimpresso en G.O. N° 5.768 Ext. del 13.04.05. Artículo 206. Todo funcionario público que bajo cualquier pretexto, aunque fuere el del silencio, oscuridad, contradicción o insuficiencia de la ley, omita o rehúse cumplir algún acto de su ministerio, será castigado con multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a un mil quinientos unidades tributarias (1.500 U.T.). ...Si el funcionario público es del ramo judicial, se reputará culpable de la omisión o de la excusa, siempre que concurren las condiciones que requiere la ley para intentar contra él el recurso de queja, a fin de hacer efectiva la responsabilidad civil. “Ley contra la Corrupción”, G.O. N° 5.637 Ext. del 07.04.03. Artículo 83. El Juez que omita o rehúse decidir, so pretexto de oscuridad, insuficiencia, contradicción o silencio de esta Ley, será penado con prisión de uno (1) a dos (2) años. Si obrare por un interés privado, la pena se aumentará al doble... Artículo 84. El Juez que retarde la tramitación del proceso con el fin de prolongar la detención del procesado o de que prescriba la acción penal correspondiente, será penado con prisión de dos (2) a cuatro (4) años...

²⁷ La parcialidad siempre ha sido una causa de incompetencia subjetiva para conocer un asunto por lo cual el funcionario está obligado a inhibirse y las partes podrán recusarlo. Sarmiento, ob. cit. p. 33.

²⁸ El cohecho fue eliminado como delito del Código Penal. Recuerda Sarmiento Sosa que probablemente el constituyente quiso referirse al delito de lucro de funcionario o el delito de corrupción previstos entonces en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público y hoy en la Ley contra la Corrupción. SARMIENTO SOSA, Carlos J.: “La Justicia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, Vadell Hermanos Editores, Caracas 2000, p.34.

²⁹ Código Penal..., ob. cit. Artículos 250 al 253.

³⁰ Exposición..., ob. cit. p. 34. Artículo 255.

³¹ Exposición..., ibídem. p. 20. Artículo 49/8.

³² Sarmiento..., ob. cit. p. 28.

³³ Sarmiento..., ibídem. p. 29.

³⁴ Sarmiento..., ibídem. p. 31.

Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela,³⁵ dispone que “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación” y la Convención Americana sobre Derechos Humanos³⁶ que “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.

5. Principios que regulan el proceso

El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.³⁷ Según Sarmiento Sosa, con dicha definición el constituyente venezolano se adhiere a la posición doctrinaria objetiva que sostiene que “la finalidad del proceso es la actuación del derecho objetivo”.³⁸ No obstante, considera el citado autor que el Código Orgánico Procesal Penal³⁹ asume la tesis subjetiva que enseña que “la finalidad del proceso debe situarse en la defensa de los derechos subjetivos”.⁴⁰

Los derechos constitucionales relativos al proceso son:

1. Derecho a libre acceso a la jurisdicción o derecho a tutela jurisdiccional: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.⁴¹

2. Derecho al debido proceso⁴² en todas las actuaciones judiciales y administrativas que consagra el principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, según el cual para ser sancionado por actos u omisiones, éstos deben estar previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes y el principio de única persecución o cosa juzgada de acuerdo al cual nadie puede ser sometido a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente; e implica:

³⁵ “Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”, G.O. N° 2.146 Ext. del 28.01.1978. Artículo 9.

³⁶ “Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos”. G.O. N° 31.256 del 14.06.77. Artículo 10.

³⁷ Exposición..., ob. cit. p. 34. Artículo 257.

³⁸ Sarmiento, ob. cit. p. 49.

³⁹ “Código Orgánico Procesal Penal”, G.O. N° 5.894 Ext. del 26.06.08. Artículo 13. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías judiciales, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión.

⁴⁰ Sarmiento..., ob. cit. p. 49.

⁴¹ Exposición..., ob. cit. p. 18. Artículo 26.

⁴² Exposición..., ibídem. p. 20. Artículo 49.

1. Derecho a la defensa y a la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso. En consecuencia se tiene derecho a ser notificado de los cargos por los cuales se les investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Presunción de inocencia.
3. Derecho a ser oído en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente, imparcial y establecido con anterioridad.
4. Derecho a un intérprete.
5. Derecho a ser juzgado por jueces naturales, en jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
6. Derecho a no confesarse culpable o declarar contra sí mismo, su cónyuge, concubino, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

7. Derecho a reparación por error judicial, retardo u omisión injustificada. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error.

3. Control de la constitucionalidad

La consagrada supremacía constitucional exige que todos los actos estatales estén sometidos a las disposiciones de la ley fundamental. Su consecuencia principal es la previsión de medios jurídicos para garantizar su efectividad.⁴³ Elemento básico del Estado de derecho, del Estado sometido al principio de la legalidad, es la existencia de un control judicial con el objeto de controlar la subordinación al derecho de todos los actos estatales.⁴⁴ Dos son los sistemas básicos de control judicial de la constitucionalidad de las leyes: el confiado a todos los tribunales, de origen norteamericano y denominado descentralizado o difuso y el que lo confía a un tribunal existente (Corte Suprema) o a un tribunal constitucional especial, de origen europeo (Constitución austriaca de 1920), aunque practicado en América Latina combinado con el americano, denominado control centralizado o concentrado.⁴⁵ El primero tendrá efectos solo *inter partes*, el segundo *erga omnes*.

⁴³ BREWER-CARIAS, Allan: "Instituciones Políticas y Constitucionales", T. III: "El Poder Nacional y el sistema democrático de gobierno", Editorial Jurídica Venezolana, Universidad Católica del Táchira, Caracas-San Cristóbal 1996, Tomo III, p. 145. (8).

⁴⁴ Brewer (6)..., ob. cit. p. 153.

⁴⁵ Brewer (6)..., ibídem, p. 157.

Dispone la Constitución venezolana que todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.⁴⁶ En caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente.⁴⁷ Todo tribunal de la República ejercerá el control difuso de la constitucionalidad únicamente para el caso concreto, en cuyo supuesto la sentencia estará expuesta a los recursos o acciones ordinarias o extraordinarias a que haya lugar; quedando a salvo en todo caso, que la Sala Constitucional haga uso, de oficio o a instancia de parte, de sus competencia y se avoque a la causa para revisarla cuando ésta se encuentre definitivamente firme.⁴⁸ Cuando cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia haga uso del control difuso de la constitucionalidad, únicamente para un caso concreto, deberá informar a la Sala Constitucional sobre los fundamentos y alcances de la desaplicación adoptada para que ésta proceda a efectuar un examen abstracto sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión, absteniéndose de revisar el mérito y alcance de la sentencia dictada por la otra Sala, la cual seguirá conservando fuerza de cosa juzgada. En caso que el examen abstracto de la norma comporte la declaratoria total o parcial de su nulidad por inconstitucional, la sentencia de la Sala Constitucional deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Oficial del Estado o Municipio, de ser el caso.⁴⁹

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de ley, cuando colidan con aquella. El control concentrado de la constitucionalidad lo conocerá la Sala Constitucional cuando medie un recurso popular de inconstitucionalidad, en cuyo caso no privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas del recurrente sobre las disposiciones expresamente denunciadas por éste, por tratarse de un asunto de orden público. Para el ejercicio de este recurso no existe lapso de caducidad. Los efectos de dicha sentencia serán de aplicación general, y se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Oficial del Estado o Municipio según corresponda.⁵⁰

Además, la Constitución de 1999,⁵¹ siguiendo el camino iniciado con la de 1961,⁵² consagró la acción de amparo para la protección de los derechos fundamentales. En 1988, después de una amplia jurisprudencia se sancionó la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.⁵³ En 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia considerando su

⁴⁶ Esta disposición tiene sus antecedentes en el Código Civil de 1916 reformado en 1986 (Artículos 7 y 20), en la Constitución de 1961, y en el "Código Orgánico Procesal Penal", G.O. N° 5.208 Extraordinario del 23.01.98. Artículo 19. Control de la constitucionalista. Corresponde a los jueces velar por la incolumidad de la Constitución de la República. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional.

⁴⁷ Exposición..., ob. cit. p. 20. Artículo 334.

⁴⁸ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 2.

⁴⁹ Ley Orgánica del Tribunal..., ibídem. Artículo 2.

⁵⁰ Ley Orgánica del Tribunal..., ibídem. Artículo 2.

⁵¹ Exposición..., ob. cit. p. 18. Artículo 27.

⁵² "Las Constituciones de Venezuela", Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 1997. p. 1.076. Artículo 49. Los Tribunales ampararán a todo habitante de la República en el goce y ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, en conformidad con la ley.

⁵³ "Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales", G.O. N° 33.891 del 22.01.1988.

función la interpretación de la Constitución,⁵⁴ y doctrina constitucional aceptada que los procedimientos orgánicos son de aplicación inmediata para todos los poderes públicos y en particular por los órganos a los que la disposición constitucional se refiere, adaptó el procedimiento de amparo establecido en la preconstitucional ley a las nuevas prescripciones constitucionales.⁵⁵ A partir de la citada sentencia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha ido ampliando sus atribuciones y competencias pronunciándose la Sala sobre la interpretación de la Constitución sin mediar ningún caso concreto y configurando un recurso autónomo de interpretación constitucional no previsto por el constituyente que, según ha señalado la Sala Constitucional, tiene como objetivo “la resolución de contradicciones, vacíos o ambigüedades que surjan del texto constitucional que se enlacen a una situación concreta”.⁵⁶

4. Organización del Sistema de Justicia

El Sistema de Justicia venezolano está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio.⁵⁷ Como se puede observar, el sistema de justicia es mucho más amplio que el Poder Judicial e incluye órganos del Poder Ciudadano, dependencias del Poder Ejecutivo y personas no estatales.

La mayoría de las disposiciones constitucionales reguladoras del Poder Judicial recogen las ya previstas en las preconstitucionales Ley Orgánica del Poder Judicial,⁵⁸ Ley del Consejo de la Judicatura,⁵⁹ y Ley de Carrera Judicial,⁶⁰ es decir, la innovación fundamental consiste en su nuevo rango constitucional. Entre las novedades de la Constitución de 1999, en lo que al Poder Judicial respecta, tenemos la creación de la Sala Constitucional y la nueva manera de designar los jueces.

En Venezuela, el Poder Judicial fue nacionalizado con la promulgación de la Constitución de 1945,⁶¹ sin embargo, a partir de la preconstitucional Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz,⁶² surge lo que calificamos de embrionario Poder Judicial Municipal. Dicha ley, al igual que la vigente, estableció que corresponde a los municipios prestar los servicios de la justicia de paz y determinar su organización.⁶³

⁵⁴ Exposición..., ob. cit. p. 20. Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la sala Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.

⁵⁵ “Sentencia N° 0001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 20.01.00” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/01-200100-00-002.

⁵⁶ “Sentencia N° 1077 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 22.09.00” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Septiembre/1077-220900-00-1289.

⁵⁷ Exposición..., ob. cit. p. 34. Artículo 253.

⁵⁸ “Ley Orgánica del Poder Judicial”, G.O. N° 5.262 Ext. del 11.09.1998.

⁵⁹ “Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura”, G.O. N° 5.262 Ext. del 11.09.1998.

⁶⁰ “Ley de Carrera Judicial”, G.O. N° 5.262 del 11.09.1998.

⁶¹ Las Constituciones..., ob. cit. p. 950. Artículo 15.

⁶² “Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz”, G.O. N° 4.634 Ext. del 22.09.1993.

⁶³ “Ley Orgánica de Justicia de Paz”, G.O. N° 4.817 Ext. del 21.12.1994. Artículo 2.

Establece la Constitución⁶⁴ que la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, dispone la Constitución que “La ley establecerá la autonomía y organización, funcionamiento disciplina e idoneidad del servicio de defensa pública, con el objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de la carrera de defensor”⁶⁵ y “regulará la organización de los circuitos judiciales, así como la creación y competencia de los tribunales y cortes regionales a fin de promover la descentralización administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial”.⁶⁶

Estas atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia son ejercidas por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, creada y organizada por la Sala Plena y cuyo Director Ejecutivo es designado por ésta. Corresponde a la Inspectoría General de Tribunales, unidad dirigida por el Inspector General de Tribunales, el cual es de libre nombramiento y remoción de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, inspeccionar y vigilar a los tribunales de la República.⁶⁷

También existirá, integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley, el Comité de Postulaciones Judiciales como órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos a Magistrados del Tribunal Supremos de Justicia y para la elección de los jueces de la jurisdicción disciplinaria por los colegios electorales judiciales.⁶⁸

La jurisdicción disciplinaria judicial está a cargo de los tribunales disciplinarios que determina la ley. El procedimiento disciplinario debe ser público oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establece la ley. El régimen disciplinario de los magistrados y jueces debe estar fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano, que dictará la Asamblea Nacional.

En 2001 el Tribunal Supremo de Justicia presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Código de Ética del Juez venezolano que sería devuelto por el Presidente de la República. En 2005, la Sala Constitucional admitió una acción de inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea Nacional, y reestructuró la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial⁶⁹ a la que le asignó la realización de un nuevo Proyecto de Código de Ética.⁷⁰ Posteriormente, acordaría medida cautelar para paralizar la discusión en la Asamblea Nacional del Código de Ética del Juez Venezolano.⁷¹ En 2006, declarararía que el Anteproyecto de Código de Ética del Juez Venezolano, presentado por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2001 y el Proyecto de Código de Ética y Disciplina del Juez Venezolano elaborado por la Asamblea Nacional habían dejado de tener validez formal por cuanto no concluyeron con la entrada en vigencia como dispone la Constitución.⁷² También declarararía la inconstitucionalidad por omisión legislativa de la Asamblea Nacional, fijaría un

⁶⁴ Exposición..., ob. cit. p. 31. Artículo 267.

⁶⁵ Exposición..., ibídem. p. 35. Artículo 268.

⁶⁶ Exposición..., ibídem. p. 35. Artículo 269.

⁶⁷ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 17.

⁶⁸ Exposición..., ob. cit. p. 35. Artículo 270.

⁶⁹ “Sentencia N° 1.057 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 01.06.05” en G.O. N° 38.214 del 22.06.05.

⁷⁰ “Sentencia N° 1.793 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 19.07.05”, en G.O. N° 38.249 del 12.08.05.

⁷¹ “Sentencia N° 2.713 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 12.08.05”, en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/2713-120805-05-0801.

⁷² “Sentencia N° 1.048 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 18.05.06”, en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1048-180506-05-0801.

período de un año para que la Asamblea Nacional realizará las consultas necesarias con todos los sectores del país y diere efectivo cumplimiento al espíritu del artículo 211 constitucional y la exhortaría a considerar el Anteproyecto de Código de Ética del Juez Venezolano, elaborado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y presentado el 13.02.2006. Asimismo dejaba sin efecto la medida cautelar antes dictada.⁷³

4.1.7.1. Jurisdicción de paz

Dispone la Constitución⁷⁴ que “La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces de paz serán elegidos por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.” Establece la ley⁷⁵ que para las elecciones de los jueces de paz, las cuales deben realizarse cada tres años a partir de la primera elección, los municipios serán divididos por la autoridad electoral competente en circunscripciones intramunicipales de cuatro mil habitantes cada una, procurando no afectar las relaciones naturales de la comunidad, en cuyo caso podrán establecerse circunscripciones con mayor o menor número de habitantes. Los procesos para la elección de jueces de paz en toda la República se registrarán por la Ley respectiva, las ordenanzas que se dicten de conformidad con la misma⁷⁶ y por la Ley Orgánica del Sufragio en cuanto le sea aplicable.

Los jueces de paz tienen por función solucionar los conflictos y controversias que se susciten en las comunidades vecinales. Su propósito fundamental es lograr la justicia del caso concreto y garantizar la convivencia pacífica de los miembros de la comunidad vecinal. Procurarán la solución de los conflictos y controversias por medio de la conciliación y cuando ello no fuere posible, con arreglo a la equidad o cuando las partes así lo soliciten, salvo que la Ley imponga una solución de derecho.⁷⁷

4.2. 7.2. Medios alternativos de Justicia

Entre los medios alternativos de justicia tenemos el arbitraje, la mediación y la conciliación. El arbitraje es, según Véscobi, “el derecho de la partes a elegir su propio órgano decisor de acuerdo a su libre voluntad y constituye la más primitiva y original forma de dirimir las diferencias”. La mediación se daría cuando “un tercero denominado mediador intenta comunicar a las partes entre sí para descubrir la solución de las diferencias” y la conciliación “es el proceso a través del cual el conciliador propone a las partes alternativas concretas para que resuelvan de común acuerdo sus diferencias”.⁷⁸ Establece la Constitución que la ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos.⁷⁹ Dichos medios alternativos de justicia estaban previstos en la preconstitucional Ley de Arbitraje Comercial.⁸⁰

⁷³ Sentencia N° 1.048..., ob. cit.

⁷⁴ Exposición..., ibídem. p. 34. Artículo 158.

⁷⁵ Ley Orgánica de Justicia..., ob. cit. Artículos 16 y 17.

⁷⁶ “Ordenanza para la Promoción y el establecimiento de la Justicia de Paz en el Municipio Maracaibo”, G.M. N° 256 del 08.12.00.

⁷⁷ Ley Orgánica de Justicia de Paz..., ob. cit. Artículos 1 y 3.

⁷⁸ Sarmiento..., ob. cit. p. 53.

⁷⁹ Exposición..., ob. cit. p. 34. Artículo 258.

⁸⁰ “Ley de Arbitraje Comercial”, G.O. N° 36.430 del 07.04.1998.

4.3. 7.3. Jurisdicciones especiales

La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.⁸¹

La jurisdicción contencioso electoral la ejerce la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley.⁸² Esta disposición correspondiente al Poder Judicial aparece ubicada inadecuadamente en el Capítulo del Poder Electoral.

Dispone la Constitución una jurisdicción especial indígena determinada por la ley. También pueden las autoridades legítimas de los pueblos indígenas aplicar a sus integrantes en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.⁸³

La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar.⁸⁴ Establece la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que el Sistema de Justicia Militar está organizado por el Circuito Judicial Penal Militar, integrado por la Corte Marcial, los Tribunales de Control, Juicio y Ejecución de Sentencia; la Fiscalía Militar; la Defensoría Militar; y los Órganos Auxiliares y de Investigación.⁸⁵ La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa comunidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en la Constitución.⁸⁶

A juicio de Petzold,⁸⁷ el enjuiciamiento de civiles acusados de presuntamente realizar actos de rebelión armada o de apoyo a éstos, por ante la jurisdicción castrense autorizado por el Código de Justicia Militar⁸⁸ atenta contra el principio de igualdad ante la ley. El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, ha determinado que de acuerdo al artículo 261 constitucional: "...los delitos comunes serán juzgados por los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de naturaleza militar. En consecuencia, deben entenderse por éstos delitos

⁸¹ Exposición..., ob. cit. p. 34. Artículo 259.

⁸² Exposición..., ibídem. p. 38. Artículo 297.

⁸³ Exposición..., ibídem. p. 34. Artículo 260.

⁸⁴ "Código Orgánico de Justicia Militar", G.O. N° 5.263 Ext. del 17.09.1998.

⁸⁵ "Decreto N° 6.239 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", G.O. N° 5.891 Ext. del 31.07.08. Artículo 125.

⁸⁶ Exposición..., ob. cit. p. 34. Artículo 261.

⁸⁷ PETZOLD PERNÍA, Hermann: "La noción de igualdad en el Derecho de algunos Estados de América Latina", LUZ, 1974.

⁸⁸ Código Orgánico de Justicia..., ob. cit. Artículos 123/2, 125/3 y 486.

aquellas infracciones que atenten a los deberes militares. La Constitución resuelve, en esta forma las viejas dudas existentes al respecto y lo hace aplicando el principio de la igualdad: no existe fuero castrense en razón de las personas que cometan o sean víctimas de delitos, sino que la jurisdicción sigue a la naturaleza de la infracción...”.⁸⁹ El criterio de la Sala Penal ha sido compartido por la Sala Constitucional al decidir que “...los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido, y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo...”.⁹⁰

7.4. El Tribunal Supremo de Justicia

El Tribunal Supremo de Justicia es la nueva denominación del máximo tribunal de la República. Siendo un tribunal colegiado, mucho más apropiado hubiese sido mantener su anterior nombre. Nuestra primera Constitución disponía que: “El Poder Judicial de la Confederación estará depositado en una Corte Suprema de Justicia, residente en la ciudad federal, y los demás Tribunales subalternos y Juzgados inferiores que el Congreso estableciere temporalmente en el territorio de la Unión”.⁹¹ Este nombre se repite en las constituciones siguientes,⁹² hasta la guerra federal y salvo la Constitución de 1821⁹³ que adoptará el nombre de Alta Corte de Justicia de Colombia. En la Constitución de 1864 fue instituida la Alta Corte Federal,⁹⁴ después Corte Federal,⁹⁵ y luego Corte Federal y de Casación.⁹⁶ Según Oropeza, confiar la administración de justicia a los estados produjo una jurisprudencia contradictoria y anárquica que dio lugar a la Corte de Casación que alcanza rango constitucional en 1881.⁹⁷

En 1945, desaparece el Poder Judicial de carácter estatal y se vuelve a la nomenclatura de Corte Suprema de Justicia⁹⁸. En la Constitución de 1953, el nombre será nuevamente Corte Federal y entre 1961 y 1999, Corte Suprema de Justicia, una vez más.⁹⁹

⁸⁹ “Sentencia N° 0750 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 23.10.01” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/750-231001-CC010687.

⁹⁰ “Sentencia N° 0551 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 17.03.03” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/551-170303-02-8865.

⁹¹ Las Constituciones..., ob. cit. p. 297. Constitución de 1811. Título 8. Artículo 1. p. 452. Constitución de 1830. Artículo 141. p. 474. Constitución de 1857. Artículo 78. p. 495. Constitución de 1858. Artículo 106.

⁹² Las Constituciones..., ibídem. p. 363. Constitución de 1819. Título 8. Artículo 1. p. 452. Constitución de 1830. Artículo 141. p. 474. Constitución de 1857. Artículo 78. p. 495. Constitución de 1858. Artículo 106.

⁹³ Las Constituciones..., ibídem. p. 390. Artículo 140.

⁹⁴ Las Constituciones..., ibídem. p. 525. Constitución de 1864. Artículo 85. p. 560. Constitución de 1874. Artículo 89. p. 599. Constitución de 1881. Artículo 76. p. 617. Constitución de 1891. Artículo 76. p. 643. Constitución de 1893. Artículo 100. p. 682. Constitución de 1901. Artículo 99.

⁹⁵ Las Constituciones..., ibídem. p. 682. Constitución de 1901. Artículo 99.

⁹⁶ Las Constituciones..., ibídem. p. 707. Constitución de 1904. Artículo 89. p. 730. Constitución de 1909. Artículo 106. p. 764. Constitución de 1914. Artículo 92. p. 794. Constitución de 1922. Artículo 92. p. 823. Constitución de 1925. Artículo 116. p. 849. Constitución de 1928. Artículo 116. p. 875. Constitución de 1929. Artículo 116. p. 901. Constitución de 1931. Artículo 116. p. 931. Constitución de 1936. Artículo 118. p. 969. Constitución de 1945. Artículo 126.

⁹⁷ OROPEZA, Ambrosio: “*La Nueva Constitución Venezolana de 1961*”, Editorial Panapo, Caracas 1992 p. 486.

⁹⁸ Las Constituciones..., ob. cit. p. 945. Artículo 15.

⁹⁹ Las Constituciones..., ibídem. p. 1060. Artículo 129. p. 1094. Constitución de 1961. Artículo 204.

7.4.1. Integración

El Tribunal Supremo de Justicia funciona en siete salas: Plena, Constitucional, Políticoadministrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social que comprende la Casación Agraria, Laboral y de Menores.¹⁰⁰

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Plena está integrada por los treinta y dos magistrados que conforman el Tribunal, la Sala Constitucional por siete y las demás salas por cinco.¹⁰¹ Inicialmente, el Tribunal Supremo de Justicia estuvo integrado por veinte magistrados. La Asamblea Nacional Constituyente, después de ser aprobada por el pueblo la Constitución de 1999, decretó un Régimen de Transición de los Poderes Públicos,¹⁰² complementario del aprobado el 15.12.1999, mediante el cual disolvió el Congreso y designó un nuevo Poder Legislativo, los titulares de los órganos del Poder Ciudadano y los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia que substituía la Corte Suprema de Justicia.¹⁰³

La antigua Corte Suprema de Justicia estuvo integrada por quince magistrados y funcionaba en Sala Plena, Político-Administrativa, de Casación Civil y de Casación Penal por así establecerlo la Disposición Transitoria Décimo Quinta de la Constitución de 1961¹⁰⁴ y luego la Ley.¹⁰⁵

7.4.2. Atribuciones

a) Sala Plena

Le corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:¹⁰⁶

1. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República o quien haga sus veces y, en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa, previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo, de los integrantes de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros, del

¹⁰⁰ Exposición..., ob. cit. p. 31. Artículo 262.

¹⁰¹ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 2.

¹⁰² Decreto... Régimen de Transición..., ob. cit.

¹⁰³ Decreto... Régimen de Transición..., ibídem. Artículo 19. De conformidad con la integración prevista por la Constitución para cada una de las Salas del tribunal Supremo de Justicia se designan: 1. A los ciudadanos, Héctor Peña Torrelles, Iván Rincón, Jesús Eduardo Cabrera, José Delgado Ocando y Moisés Troconis, Magistrados de la Sala Constitucional. 2. A los ciudadanos Carlos Escarrá, José Rafael Tinoco y Levis Ignacio Zerpa, Magistrados de la Sala Político Administrativa. 3. A los ciudadanos Antonio García García, José Peña Solís Y Octavio Sisco, Magistrados de la Sala Electoral. 4. A los ciudadanos Jorge Rossel, Luís Alejandro Angulo y Rafael Pérez Perdomo, Magistrados de la sala de Casación Penal, 5. A los ciudadanos Antonio Ramírez Jiménez, Carlos Oberto Vélez y Franklin Arriechi, Magistrados de la Sala de Casación Civil. 6. A los ciudadanos Alberto Martín Urdaneta, Juan Rafael Perdomo y Omar Mora, Magistrados de la Sala Social. Se designa al ciudadano Iván Rincón como Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al ciudadano, Franklin Arriechi como su Primer Vicepresidente y al ciudadano Jorge Rossel como su Segundo Vicepresidente. La Comisión Legislativa Nacional nombrará a los ciudadanos suplentes de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

¹⁰⁴ Las Constituciones..., ob. cit. p. 1108.

¹⁰⁵ “Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”. G.O. N° 1.893 Ext. del 30.07.1976. Artículo 24.

¹⁰⁶ Exposición..., ob. cit. p. 35. Artículo 266/2 /3.

Procurador General de la República, del Defensor del Pueblo, de los gobernadores, de oficiales, generales y almirantes, de jefes de misiones diplomáticas y, en caso afirmativo, remitir los actos al Fiscal General de la República, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.

La Roche habla del juicio político para referirse a la justicia política como la institución que coloca a determinados funcionarios públicos bajo la jurisdicción de un organismo especial.¹⁰⁷ El antejuicio de mérito es una institución procesal constitucional cuyo objeto fundamental es determinar, previo a un procedimiento, si existe una causa probable que permita autorizar el enjuiciamiento (juicio de fondo) de los altos funcionarios. Más que un privilegio es una prerrogativa procesal penal que se concede en razón de la función que se ejerce y no de la persona del funcionario. Se trata de una excepción al principio de la igualdad ante la Ley¹⁰⁸ para proteger el ejercicio de ciertas funciones públicas en beneficio del interés común.

En el caso de los diputados se seguirá lo establecido en el artículo 200 constitucional.¹⁰⁹ En todo caso, el Tribunal Supremo de Justicia conoce de este procedimiento a instancia del Fiscal General de la República y de acuerdo a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia,¹¹⁰ y en todo lo no previsto se aplicarán las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal,¹¹¹ del Código de Procedimiento Civil,¹¹² así como las disposiciones normativas que emanen de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

También le corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Recibir el juramento del Presidente de la República en el caso previsto en el artículo 231 de la Constitución.¹¹³
2. Iniciar proyectos de ley relativos a la organización y procedimientos judiciales y designar a aquéllos de sus miembros que deban representarla en las sesiones en que ellos se discutan.¹¹⁴

Por su parte la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que corresponden a la Sala Plena las competencias siguientes:¹¹⁵

- 1- Recomendar a los otros Poderes Públicos reformas en la legislación sobre materias en las que no tenga iniciativa legislativa. Elaborar y ejecutar su propio presupuesto y el del Poder Judicial.

¹⁰⁷ La Roche (1970)..., ob. cit. p. 173.

¹⁰⁸ Exposición..., ob. cit. p. 18. Artículo 21.

¹⁰⁹ Exposición..., ibídem. p. 31. Artículo 200. ...De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia...

¹¹⁰ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 22.

¹¹¹ Código Orgánico Procesal..., ob. cit.

¹¹² Código de Procedimiento..., ob. cit.

¹¹³ Exposición..., ob. cit. p. 32.

¹¹⁴ Exposición..., ibídem. p. 31. Artículo 204/4.

¹¹⁵ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 5.

- 2- Elegir su Junta Directiva y la de cada sala.
- 3- Nombrar y juramentar los jueces de la república.
- 4- Nombrar a los funcionarios, empleados del Poder Judicial, cuya designación le atribuya la ley y recibir el juramento de aquéllos que deban prestarlo ante él.
- 5- Decidir la creación de los juzgados de sustanciación previstos en esta Ley, y atribuirle la sustanciación de los asuntos de su competencia que lo requieran.
- 6- Calificar sus miembros, y concederles licencias por más de siete días, recibir sus renunciaciones y remitirlas a la Asamblea Nacional.
- 7- Dictar las normas concernientes a los derechos y obligaciones de los empleados a su servicio, y organizar el sistema de administración de dicho personal.
- 8- Ordenar las publicaciones que juzgare conveniente en materia de su competencia.
- 9- Dictar su reglamento interno.
- 10- Conceder los permisos a que se refiere la Ley sobre el Derecho de Autor para la publicación de sus sentencias, previa su confrontación con los originales a costa de los interesados.

b) Sala Constitucional

Le corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII.¹¹⁶

Son atribuciones de la Sala Constitucional:¹¹⁷

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con la Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estatales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ella.

Con respecto a las ordenanzas municipales la Sala Constitucional ha tenido una jurisprudencia contradictoria. Por una parte, ha señalado (caso Ivonne Dávila de Soto y otros)¹¹⁸ que efectivamente de acuerdo a lo dispuesto en el numeral que comentamos es de su competencia las acciones de nulidad que se interpongan contra ordenanzas municipales y en consecuencia aceptaba la declinatoria de competencia realizada por la Sala Político Administrativa. No obstante, en decisión posterior,

¹¹⁶ Exposición..., ob. cit. p. 35. Artículo 266/1.

¹¹⁷ Exposición..., ibídem. p. 41. Artículo 336.

¹¹⁸ “Sentencia N° 0077 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 30.01.01” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/77-300101-00-1599.

declararía que las leyes estatales y las ordenanzas municipales tienen rango sublegal y en consecuencia, solo cuando sean dictadas en ejecución directa e inmediata de la Constitución será competencia de la Sala Constitucional su nulidad.¹¹⁹

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con la Constitución.
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.
5. Verificar, a solicitud del Presidente de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con la Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.
6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción.¹²⁰

Este procedimiento mediante el cual se ejerce el control de la constitucionalidad del decreto de excepción es regulado en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción¹²¹.

7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos para su corrección.

Es esta una de las novedades de la Constitución de 1999, aunque estaba presente en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.¹²² La inconstitucionalidad por omisión está prevista en las constituciones de Portugal y Brasil.¹²³ En varias oportunidades la Sala Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad por omisión fijando plazos para cumplir con la obligación constitucional de sancionar la ley correspondiente. Ha ocurrido, entre otras, con la Ley sobre Régimen Municipal¹²⁴ estableciendo tres meses de plazo, y con la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo,¹²⁵ contentiva del nuevo régimen de prestaciones sociales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92¹²⁶ y con la disposición transitoria cuarta, numeral 3, para la cual fijó seis meses.¹²⁷

¹¹⁹ “Sentencia N° 2353 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 23.11.01” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/2353-231101-00-2517.

¹²⁰ Exposición..., ob. cit. p. 41. Artículos 337 y siguientes.

¹²¹ “Ley Orgánica sobre Estados de Excepción”, G.O. N° 37.261 del 15.08.01. Artículos 31 y siguientes.

¹²² “Ley Orgánica de Amparo sobre Garantías y Derechos Constitucionales”, G.O. N° 33.891 del 22.01.1998. Artículo 5.

¹²³ Constituciones..., ibídem, p. 183. Artículo 103.

¹²⁴ Sentencia N° 1168 ..., ob. cit.

¹²⁵ “Sentencia N 3118 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 06.11.03” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/3118-061103-03-1167.

¹²⁶ Exposición..., ob. cit. p. 23. Artículo 92. Todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía...

¹²⁷ Exposición..., ibídem, p. 42. Disposición Transitoria Cuarta. Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará: 3. Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo

En el caso de la designación del Poder Electoral, la Sala Constitucional declaró la omisión legislativa y estableció un plazo de diez días para la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, entre los postulados por el Comité de Postulaciones Electorales, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Electoral y anunció el procedimiento que seguiría en caso de no hacerse el nombramiento.¹²⁸ Posteriormente,¹²⁹ atribuyéndose competencias que le corresponden a la Asamblea Nacional, designó los rectores electorales, principales y suplentes, desconociendo el principio de despartidización al pretender, como ya lo había intentado la Asamblea Nacional, alcanzar un equilibrio entre representantes del gobierno y de la oposición. Las postulaciones hechas por la sociedad civil y por las facultades de las universidades nacionales de ciencias jurídicas y políticas fueron ignoradas o subordinadas a la representatividad política. El procedimiento seguido, contraviene el constitucionalmente previsto¹³⁰ y a la Ley Orgánica del Poder Electoral.¹³¹ A nuestro juicio, la Sala Constitucional también invadió competencias del propio Poder Electoral al escoger el Presidente y Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el Secretario General, el Consultor Jurídico, integrantes de la Junta Electoral Nacional, Comisión de Registro Civil y Electoral, Comisión de Participación Política y Financiamiento y Consejo de Participación Política.

8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.

Ha determinado la Sala Constitucional (caso: María Josefina Medina)¹³² que el conflicto de leyes se manifiesta “cuando la aplicación de una de las normas implica la violación del objeto de la otra norma en conflicto; o bien, cuando impide la ejecución de la misma. No se exige que exista un caso concreto de conflicto planteado, cuya decisión dependa del predominio de una norma sobre otra; sino que el conflicto puede ser potencial, es decir, susceptible materializarse en cualquier momento en que se concreten las situaciones que la norma regula”.

9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público.

régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de diez años...

¹²⁸ “*Sentencia N° 2073 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 04.08.03*” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/2073-040803-03-1254.

¹²⁹ “*Sentencia N° 2341 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 25.08.03*” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/2341-250803-03-1254.

¹³⁰ Exposición..., ob. cit. p. 41. **Artículos 296.** El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos serán postulados por la sociedad civil, una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno por el Poder Ciudadano. Los integrantes postulados por la sociedad civil tendrán seis suplentes en secuencia ordinal y cada designado por las universidades y el Poder Ciudadano tendrán dos suplentes, respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación y Financiamiento, serán presididas cada una por un integrante postulado por la sociedad civil. Los integrantes del Consejo Nacional durarán siete años en sus funciones y serán elegidos por separado: los tres postulados por la sociedad civil al inicio de cada periodo de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo. Los integrantes del Consejo Nacional serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno al Presidente, de conformidad con la ley. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.

¹³¹ “*Ley Orgánica del Poder Electoral*”, G.O. N° 37.573 del 19.11.02.

¹³² “*Sentencia N° 1074 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 27.09.00*” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Septiembre/1074-190900-00-1136.

Señala la Exposición de Motivos de la Constitución de 1999¹³³ que controversias constitucionales son aquellas entre cualesquiera de los órganos que la Constitución prevé en la distribución horizontal y vertical del Poder Público cuya decisión depende del examen, interpretación y aplicación de normas constitucionales, tales como las que se refieren al reparto competencia. La Sala Político-Administrativa, en decisión del caso Inspector de Tribunales vs. Presidente de la Comisión Legislativa Nacional estableció la distinción entre controversia administrativa y constitucional.¹³⁴

10. Revisar las sentencias definitivamente firmas de amparo constitucional y de control de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.

Es ésta una de las innovaciones de la Constitución de 1999. Ha sostenido Casal que este numeral pretende en lo que a control difuso de la constitucionalidad se refiere, “asegurar certeza jurídica” sobre la compatibilidad de las leyes con la Constitución. En cuanto a la revisión de sentencias de amparo procura sobretudo “el establecimiento de criterios uniformes” sobre su funcionamiento y la interpretación de derechos fundamentales, aunque también pueda ser utilizado para corregir graves violaciones de derechos constitucionales.¹³⁵

Dispone la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que se revisarán las sentencias de las salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala.¹³⁶

La Sala Constitucional ha interpretando que la expresión tribunales incluye a las demás salas del máximo tribunal. En la práctica, el recurso de revisión se ha convertido en la última instancia procesal mediante la cual los fallos de todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia son revisados por la Sala Constitucional cuando ésta decida admitir el recurso.

También la competencia de la Sala Constitucional en materia de amparo ha sido producto de la interpretación vinculante de su facultad revisora. Como se sabe la Sala Constitucional (caso Servio Tulio León Briceño)¹³⁷ estableció su competencia para conocer de solicitudes de interpretación del texto constitucional. Señalo que “ante la inexistencia de una disposición concreta que la prevea, se fundamenta en la cualidad que tiene... de máxima garante de la integridad y vigencia del Texto Fundamental, así como en el poder que en forma expresa (artículo 335) se le atribuye para la

¹³³ Exposición..., ob. cit. p. 14.

¹³⁴ “Sentencia N° 1819 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 08.08.00” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/01819-080800-0806.

¹³⁵ CASAL H., Jesús María: “*La Facultad Revisora de la Sala Constitucional prevista en el numeral 10 del Artículo 336 de la Constitución*”, en Revista de Derecho Constitucional N° 3, julio-diciembre, 2000, Editorial Sherwood, Caracas p. 267-283.

¹³⁶ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 5.

¹³⁷ Sentencia de la Sala Constitucional N° 1077..., ob. cit.

interpretación vinculante de sus normas.” Estableció que le corresponde “con carácter exclusivo la interpretación máxima y última de la Constitución, y debido a tal exclusividad, lo natural es que sea ella quien conozca de los recursos de interpretación de la Constitución, como bien lo dice la Exposición de Motivos..., no siendo concebible que otra Sala diferente a la Constitucional, como sería la Sala Político Administrativa, pueda interpretar como producto de una acción autónoma de interpretación constitucional, el contenido y alcance de las normas constitucionales, con su corolario: el carácter vinculante de la interpretación.

En materia de amparo, la Sala Constitucional modificó el régimen de competencias legal establecido al disponer (caso Emery Mata Millán)¹³⁸ que “la competencia que contempla el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ha desaparecido, ya que la materia constitucional corresponde a esta Sala.” La Sala Constitucional, de acuerdo a la sentencia citada, tiene “la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales” y las apelaciones y consultas cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia. También se establece que podrá por vía excepcional “revisar discrecionalmente las sentencias de amparo que sean de la exclusiva competencia de los Tribunales de Segunda Instancia, quienes conozcan la causa por apelación y que por lo tanto no susceptibles de consulta, así como cualquier otro fallo que desacate la doctrina vinculante de esta Sala, dictada en materia constitucional”. Determinó la Sala Constitucional que este poder revisorio general se extiende a todo amparo, pudiendo ser declarado de oficio.

11. Las demás que establece la Constitución y la ley, entre las cuales tenemos:

1. Conocer, antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico de las leyes dictadas por la Asamblea Nacional, y de los Decretos con Fuerza de Ley que dicte el Presidente de la República en Consejo de Ministros mediante Ley Habilitante.¹³⁹
2. Conocer de la solicitud de pronunciamiento, efectuada por el Presidente de la República, sobre la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional.¹⁴⁰

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia recoge la doctrina de la Sala Constitucional al establecer las competencias siguientes:¹⁴¹

3. Resolver los conflictos de cualquier naturaleza que puedan suscitarse entre las Salas que lo integran o entre los funcionarios del propio Tribunal, con motivo de sus funciones.

¹³⁸ Sentencia de la Sala Constitucional N° 0001..., ob. cit.

¹³⁹ Exposición..., ob. cit. p. 31. Artículo 206... “Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificada de orgánicas serán remitidas, antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de diez días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara que la ley no es orgánica, la ley perderá este carácter.”

¹⁴⁰ Exposición..., ibídem. p. 31. Artículo 214.

¹⁴¹ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 5.

Durante la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia¹⁴² esta atribución correspondía a la Corte en Pleno.

4. Conocer de las apelaciones contra las sentencias de amparo constitucional y de la acción autónoma de amparo, contra las sentencias que dicten los tribunales superiores como tribunales de primera instancia, que decidan sobre la acción de reclamo para garantizar el derecho humano a réplica y rectificación o para proteger el derecho al honor, a la vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas afectadas directamente por la difusión de mensajes e informaciones falsas, inexactas o agraviantes a través de los prestadores de servicios de radio y televisión. En todo caso el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, tiene la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida.
5. Conocer en primera y última instancia las acciones de amparo constitucional interpuestas contra los altos funcionarios públicos nacionales.
6. Conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Contencioso Administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal, con ocasión a la interposición de acciones autónomas de amparo constitucional.
7. Conocer las acciones autónomas de amparo constitucional contra las sentencias en última instancia dictadas por los Tribunales Contencioso Administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal.
8. Efectuar, examen abstracto y general sobre la constitucionalidad de una norma previamente desaplicada mediante control difuso de la constitucionalidad por una Sala del Tribunal Supremo de Justicia, absteniéndose de conocer sobre el mérito y fundamento de la sentencia pasada con fuerza de cosa juzgada.
9. Conocer de las controversias que pudieren suscitarse con motivo de la interpretación y ejecución de los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por la República. La sentencia dictada deberá ajustarse a los principios de justicia internacionalmente reconocidos y será de obligatorio cumplimiento por parte del Estado Venezolano.

c) Sala Político-Administrativa

Le corresponde a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.¹⁴³

1. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, a menos que se trate de municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal.

¹⁴² Ley Orgánica de la Corte..., ob. cit. Artículos 42/7 y 43.

¹⁴³ Exposición..., ob. cit. p. 35. Artículo 266/4/5.

2. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente.

Asimismo, según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia¹⁴⁴ serían competencias de la Sala Político Administrativa:

1. Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias.
2. Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los estados o los municipios, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias.
3. Conocer de la abstención o negativa del Presidente de la República, del Vicepresidente Ejecutivo y de los ministros, así como de las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional con autonomía funcional, financiera y administrativa y del Alcalde del Distrito Capital, a cumplir específicos y concretos actos a que estén obligados por las Leyes.
4. Conocer de las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a los órganos del Ejecutivo Nacional y demás altas autoridades de rango nacional que ejerzan el Poder Público.
5. Conocer, en alzada de las decisiones de los Tribunales Contencioso Administrativos, cuando su conocimiento no estuviera atribuido a otro tribunal, y de los recursos, cuando se demande la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto general que le sirva de fundamento.
6. Conocer de las causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la República, en los casos permitidos por el Derecho Internacional.
7. Conocer en apelación de los juicios de expropiación.

Esta materia está regulada por la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social.¹⁴⁵

8. Conocer de las causas de presa.
9. Conocer de las causas por hechos ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o en puertos o territorios extranjeros, que puedan ser promovidos en la República, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal.
10. Conocer y decidir, en segunda instancia, las apelaciones y demás acciones o recursos contra las sentencias, dictadas por los Tribunales Contencioso Administrativos, cuando su

¹⁴⁴ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 5.

¹⁴⁵ "Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social", G.O. N° 37.475 del 01.07.02.

conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal, que decidan sobre las acciones de reclamos por la prestación de servicios públicos nacionales.

11. Designar, por las dos terceras partes de los miembros de la Sala Político-Administrativa, a los jueces de la jurisdicción Contencioso Administrativo y tribunales regionales.

d) Sala Electoral

Dispone la Constitución¹⁴⁶ que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia podrá ordenar al Consejo Nacional Electoral la organización de elecciones de organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia¹⁴⁷ establece las competencias siguientes:

1. Conocer los recursos que se ejerzan contra actos, actuaciones y omisiones relacionados con la Constitución, denominación, funcionamiento y cancelación de las organizaciones políticas con la designación de miembros de organismos electorales, con el Registro Electoral Permanente, con la postulación y elección de candidatos a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional.
2. Conocer de aquellos fallos emanados de los tribunales con competencia en materia electoral, que aun cuando no fueren recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala Electoral;

e) Sala de Casación Civil

De acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia¹⁴⁸ le corresponde:

1. Conocer del recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y marítimos.
2. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados Internacionales o en la ley;

El recurso de casación “es una instancia extraordinaria que se da a la parte perdedora en un litigio cuando conceptúa que en dicho litigio se ha incurrido en violación de la ley o en omisión de tipo procedimental”¹⁴⁹ Para Rengel Romberg “...la Casación es el recurso extraordinario de impugnación de la sentencia de mérito de última instancia, viciada por los motivos denunciados por la parte interesada ante el Tribunal Supremo de Justicia, único competente para la anulación de la sentencia y asegurar así la integridad de la legislación y la conformidad de la jurisprudencia”¹⁵⁰.

¹⁴⁶ Exposición..., ob. cit. p. 37. Artículo 293/6.

¹⁴⁷ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 5.

¹⁴⁸ Ley Orgánica del Tribunal.... *ibídem.* Artículo 5.

¹⁴⁹ La Roche (1970)...., ob. cit. p. 155.

¹⁵⁰ Rengel Romberg..., ob. cit.

f) Sala de Casación Social

De acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia¹⁵¹ le corresponde:

1. Conocer del recurso de casación en los juicios del trabajo, familia, menores, ambiente y agrario.
2. Conocer en alzada de los recursos contencioso administrativos de nulidad en materia ambiental y agraria;

g) Sala de Casación Penal

De acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia¹⁵² le corresponde:

1. Declarar si hay o no lugar para solicitar o conceder la extradición.
2. Conocer de los recursos de casación y de cualesquiera otros cuyo conocimiento le atribuyan las leyes en materia penal.
3. Conocer de las solicitudes de radicación de juicio y de conmutación de las penas.

Asimismo, le corresponderá a la Sala afín con la materia:

1. Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley.
2. Conocer de cualquier controversia o asunto litigioso que le atribuyan las leyes, o que le corresponda conforme a éstas en su condición de más alto Tribunal de la República.
3. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente.

Esta atribución deberá ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido.¹⁵³

Según de Pina, citado por Petzold,¹⁵⁴ la avocación (o avocamiento) es: "Acto en virtud del cual un órgano jurisdiccional superior atrae y toma a su cargo la causa que se litiga o debe normalmente litigarse en otro inferior", y avocar es: "Hacerse cargo un órgano jurisdiccional o administrativo de un asunto que se encuentra pendiente de resolución ante otro jerárquicamente inferior de igual naturaleza" (Diccionario de Derecho, 1965 p. 40). Señala Petzold, que el avocamiento "solamente puede darse entre un tribunal superior y uno jerárquicamente inferior o

¹⁵¹ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 5.

¹⁵² Ley Orgánica del Tribunal..., ibídem. Artículo 5.

¹⁵³ Ley Orgánica del Tribunal..., ibídem. Artículo 18.

¹⁵⁴ PETZOLD PERNÍA, Hermann: "EL TSJ y el avocamiento", Diario La Verdad de Maracaibo del 23.03.04.

subalterno, pero nunca entre tribunales que se hallen en el mismo nivel o sean de igual jerarquía, como es el caso de las seis Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia.” De acordarse el avocamiento entre Salas del máximo tribunal se “estaría incurriendo en un acto inconstitucional e ilegal, jurídicamente nulo o inexistente...”.¹⁵⁵

Opinión distinta ha sostenido la Sala Constitucional al avocarse al conocimiento de causas en curso en otras salas del tribunal como cuando el 16.03.2004 ordeno a la Sala Electoral le enviare todos los expedientes relacionados con el referendo revocatorio a los efectos de decidir si era procedente o no una solicitud de avocamiento. Asimismo le ordeno paralizar todos los procesos y abstenerse de cualquier decisión hasta tanto no resuelva sobre el avocamiento incoado.¹⁵⁶

4. Conocer de los recursos de hecho que le sean presentados.
5. Conocer de los juicios en que se ventilen varias acciones conexas, siempre que al tribunal esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas.
6. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido.

Igualmente, serán ejercidas en cada Sala, dentro de los ámbitos de su competencia, conforme a las disposiciones de esta Ley y el Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, las atribuciones siguientes:¹⁵⁷

1. Nombrar y remover a los secretarios, alguaciles y los demás funcionarios y empleados de su dependencia, o delegar en su Presidente el nombramiento y remoción de estos últimos.
2. Recibir el juramento que deben prestar los funcionarios y empleados del Tribunal Supremo de Justicia o comisionar a su Presidente para hacerlo, si se tratare de estos últimos.
3. Autorizar a los defensores públicos y sus suplentes ante el Tribunal Supremo de Justicia.
4. Conceder licencia a magistrados, funcionarios y demás empleados, por más de siete días si hubiere motivos plenamente justificados y prorrogarlos hasta por tres meses, en casos de enfermedad.
5. Ordenar la convocatoria de los suplentes y conjuces respectivos, en caso de falta temporal o accidental.
6. Designar a quienes deban suplir temporalmente a los secretarios y alguaciles, en caso de falta absoluta, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley.

¹⁵⁵ Petzold (2.004)..., ibídem.

¹⁵⁶ “Sentencia N° 0347 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 16.03.04” www.tsj.org.ve.sc/decisiones/scon/Abril/0347-160304-04-0475.

¹⁵⁷ Ley Orgánica del Tribunal..., ibídem. Artículo 6.

7. Mantener la disciplina interna e imponer las sanciones correspondientes por las faltas en que puedan incurrir funcionarios o particulares de conformidad con la Ley.
8. Recibir la cuenta de los asuntos que se someten a su consideración y darles el destino correspondiente.

7.4.3. Requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia

Para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:^{158 159}

1. Ser venezolano por nacimiento sin otra nacionalidad.
2. Estar en plena capacidad mental;
3. Ser ciudadano de reconocida honorabilidad y conducta ética y moral intachables.
4. No haber sido sometido a procedimiento administrativo o sancionatorio ni a juicio ni haber sido condenado mediante el correspondiente acto o sentencia definitivamente firme;
5. En forma alternativa, no acumulativa:
 - 5.1. Ser jurista de reconocida competencia, de buena reputación.
 - 5.2. Ejercicio de la abogacía durante un mínimo de quince años, y tener título universitario de postgrado en materia jurídica.
 - 5.3. Haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener categoría de profesor titular.

Estableció la Sala Constitucional, en decisión del caso Defensoría del Pueblo, que “se trata de un conjunto de requisitos que deben concurrir, pero que para no violar derechos adquiridos, también de naturaleza constitucional, hay que analizar si para la fecha de graduación del abogado, existía o no organizado en el país un sistema de post grado a que pudiera acceder”.¹⁶⁰

En la sentencia, antes citada, la Sala Constitucional, decidió que “la categoría de profesor titular no podría entenderse en el sentido de un grado dentro de la jerarquía de una carrera, ya que la norma para nada se refiere a la carrera universitaria... y además, quien ingresa a una Universidad como instructor difícilmente puede llegar a la más alta jerarquía en un lapso de quince años. De allí que la categoría de titular tiene que ser entendida como la condición de una persona respecto de las demás.” Para la Sala bastará que “el docente universitario tenga una antigüedad mínima de quince años como profesor y se trate de un profesor titular, es decir, ordinario activo o jubilado”.

¹⁵⁸ Exposición..., ob. cit. p. 35. Artículo 263.

¹⁵⁹ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 7.

¹⁶⁰ “Sentencia N° 1562 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 12.12.00” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1562-121200-00-3035.

- 5.4. Ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
6. Haber renunciado a cualquier militancia político partidista, y no tener vínculo, hasta el cuarto grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, los ministros del Ejecutivo Nacional, el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República;
7. No estar unido por matrimonio ni mantener unión estable de hecho con alguno de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia;
8. No realizar alguna actividad incompatible con las funciones y atribuciones de los Magistrados de conformidad con la ley.

5.4.1. Periodo, procedimiento para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años. Los candidatos deberán ser postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva. Los ciudadanos podrán objetar a cualquiera de los postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional.¹⁶¹

El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremos de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces de la jurisdicción disciplinaria.¹⁶² El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por once miembros principales, son sus respectivos suplentes designados por la Asamblea Nacional, que además nombrará el Presidente, mediante un procedimiento público y transparente por un período de dos años. Cinco miembros serán elegidos diputados y seis representarán los diferentes sectores de la sociedad.¹⁶³ El legislador resolvió que la representación de los diferentes sectores de la sociedad constitucionalmente establecida¹⁶⁴ se redujese a un poco más de la mitad de los miembros. De tal manera que no fue suficiente para el Poder Legislativo tener la facultad de designar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, sino que consideró conveniente participar, o más bien controlar el proceso de participación de la sociedad civil en todas sus fases.

Recibida la segunda preselección, la Asamblea Nacional, en sesión plenaria, convocada, por lo menos, con tres días hábiles de anticipación, hará la selección definitiva con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. En caso de que no se logre el voto favorable de la mayoría

¹⁶¹ Exposición..., ob. cit. p. 35. [Artículo 264](#).

¹⁶² Exposición..., ibídem. p. 35. [Artículo 270](#).

¹⁶³ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. [Artículo 13](#).

¹⁶⁴ Exposición..., ibídem. p. 35. [Artículo 270](#).

calificada requerida, se convocará a una segunda sesión plenaria; y si tampoco se obtuviese el voto favorable, de la mayoría calificada requerida, se convocará a una tercera sesión y si en ésta, tampoco se consiguiera el voto favorable requerido, se convocará a una cuarta sesión plenaria, en la cual se harán designaciones con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional.¹⁶⁵

Los primeros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fueron designados mediante un acto constituyente de la Asamblea Nacional sin seguir el procedimiento previsto en la Constitución aprobada por el pueblo que sería publicada después de dichos nombramientos. En cuanto a los requisitos se sancionó la Ley N° 5. Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios del Poder Ciudadano y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para su Primer Período Constitucional que daba un trato privilegiado a quienes se venían desempeñando como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.¹⁶⁶ La ley citada fue objeto de una acción de nulidad por inconstitucionalidad incoada por la Defensoría del Pueblo. La Sala Constitucional consideró que no estando la figura de la ratificación prevista constitucionalmente sino en el Régimen de Transición del Poder Público,¹⁶⁷ el cual es de rango constitucional, “el régimen de ratificación debe ser especial, orientado hacia el cual ha sido el rendimiento de los Magistrados a ratificarse y la calidad de sus ponencias, ya que son éstos los parámetros que permiten conocer la calidad de quienes como Magistrados ya han impartido justicia desde la más alta Magistratura, y por tanto se han hecho o no dignos de ratificación. Exigírsele a dichos Magistrados, además, otros requisitos que ni la Constitución (que no previó la figura), ni ninguna otra ley contempla, es crear una discriminación en contra de los ratificables, en relación con quienes no han sido Magistrados, que aspiran integrar las Salas del Tribunal Supremo de Justicia”.¹⁶⁸

6.4.4. Procedimiento para la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.¹⁶⁹

Dispone la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia¹⁷⁰ que se consideran falta grave las siguientes:

1. Las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano,¹⁷¹ a saber:
 - 1.1. Cuando atenten, amenacen, o lesionen la ética pública y la moral administrativa establecida en la presente Ley.

¹⁶⁵ Ley Orgánica del Tribunal..., ibídem. Artículo 8.

¹⁶⁶ “Ley N° 5. Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios del Poder Ciudadano y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para su Primer Período Constitucional.” G.O. N° 37.077 del 14.11.00.

¹⁶⁷ Decreto... Régimen de Transición de los Poderes Públicos..., ob. cit.

¹⁶⁸ Sentencia N° 1562..., ob. cit.

¹⁶⁹ Exposición..., ob. cit. p. 35. Artículo 265.

¹⁷⁰ Ley Orgánica del Tribunal..., ob. cit. Artículo 12.

¹⁷¹ “Ley Orgánica del Poder Ciudadano”. G.O. N° 37.310 del 25.10.01. Artículo 11.

- 1.2. Cuando incurran en algunas de las causales de destitución del cargo previsto en el Código de Ética del Juez Venezolano.
- 1.3. Cuando actúen con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución, de la ley y del derecho.
- 1.4. Cuando adopten decisiones que atenten o lesionen los intereses de la Nación.
- 1.5. Cuando violen, amenacen, o menoscaben los principios fundamentales establecidos en la Constitución.
- 1.6. Cuando lleven a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, o realicen actividades privadas lucrativas incompatibles con su función por sí, o por interpuesta persona, o ejerzan cualquier otra función pública, a excepción de actividades educativas.
2. Manifiesta incapacidad físico mental permanente, certificada por una junta médica, designada por el Tribunal Supremo de Justicia con la aprobación de la Asamblea Nacional.
3. Falta de imparcialidad o independencia en el ejercicio de sus funciones. Se considerará violación a la debida imparcialidad, la no inhibición cuando sea procedente.
4. Eximirse de ejercer sus funciones, salvo en los casos de inhibición o recusación.
5. Llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante.
6. Realizar actividades privadas o incompatibles con su función, por sí o por interpuestas personas.
7. Ejercer simultáneamente otro cargo público, salvo lo previsto para cargos académicos o docentes establecidos en esta Ley.
8. Incurrir en tres inasistencias injustificadas a las reuniones de Sala, en el transcurso de un mes calendario.
9. Por abandono del cargo, declarado por el Tribunal Supremo de Justicia.
10. Por incumplimiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes.
11. Cuando sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial y de los órganos que represente.
12. Cuando cometan hechos graves que constituyendo o no delitos pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad comprometiendo la dignidad del cargo.
13. Cuando ejerzan influencia directa en la designación de quienes cumplan funciones públicas.
14. Cuando incurran en abuso o exceso de autoridad.

15. Cuando incurran en grave e inexcusable error, cohecho, prevaricación, dolo o denegación de justicia.
16. Cuando en sus decisiones hagan constar hechos que no sucedieron, o dejen de relacionar los que ocurrieron.
17. Cuando infrinjan algunas de las prohibiciones establecidas en la Constitución y en las leyes.

Una vez calificada la falta y recibidas las actuaciones del Consejo Moral Republicano, el Presidente de la Asamblea Nacional deberá convocar, dentro de los diez días hábiles siguientes, a una sesión plenaria para dar audiencia y escuchar al interesado, debiendo resolver sobre la remoción inmediatamente después de dicha exposición.

4.4. 7.5. El sistema penitenciario

El sistema penitenciario debe garantizar el respeto a sus derechos humanos y asegurar la rehabilitación del interno, es decir, su corrección a los fines de su reincorporación a la vida social. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales y municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las formulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia post penitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”.¹⁷²

Por su parte, el artículo 184,7 constitucional dispone la participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población. En tal sentido, la ley debe crear mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados que estos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos.¹⁷³

Lamentablemente, estas disposiciones han sido ignoradas por el Poder Legislativo, y mucho menos puestas en práctica por el Poder Ejecutivo. En la reforma post constitucional de la Ley de Régimen Penitenciario¹⁷⁴ ni siquiera fue prevista la asistencia postpenitenciaria. Por otra parte, no obstante existir el Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios, ni siquiera el diez por ciento de los egresados han sido contratados. Finalmente, llama la atención la atención en una Constitución inclinada hacia el estatismo en cuanto al régimen penitenciario se establezca una apertura hacia modalidades de privatización y la referencia concreta a mecanismos de descentralización del artículo que comentamos.

¹⁷² Exposición..., ob. cit. p. 35. Artículo 272.

¹⁷³ Exposición..., ob. cit. p. 29.

¹⁷⁴ “Ley del Régimen Penitenciario”, G.O. N° 36.975 del 19.06.00.

Apéndice

a) Presupuesto del Sistema de Administración de Justicia en el Presupuesto Ordinario Nacional 2001-2007

Años/Instituciones	TSJ	Ministerio Público	Total
2001	509.590,80	136.708,20	646.299,00
2002	589.790,00	189.466,10	779.256,10
2003	680.018,70	229.742,10	909.761,10
2004	742.020,032	250.965,63	992.985,66
2005	1.381.326,70	343.814,50	1.725.141,20
2006	1.891.296,85	521.549,30	2.412.846,15
2007	2.744.553,57	710.722,29	3.455.275,86

“Programa venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos PROVEA Informe Anual 2006-2007”

b) Porcentaje del presupuesto del Sistema de Administración de Justicia en el Presupuesto Ordinario Nacional

Total SAJ	Total Presupuesto	% SAJ
2001	646.299,00	2,30
2002	779.256,10	2,46
2003	909.761,10	2,19
2004	992.985,66	2,0
2005	1.725.141,20	2,49
2006	2.412.846,15	2,67
2007	3.455.275,86	3

“Programa venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos PROVEA Informe Anual 2006-2007”

c) Total de jueces: 1.822

Años	Jueces titulares	%
2004	200	10,9
2005	476	26,1
2006	229	12,5
Total	905	49,5

“Programa venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos PROVEA Informe Anual 2006-2007”

d) **VOTO SALVADO ANTE LA APROBACION INCONSTITUCIONAL DE LA DENOMINADA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

Ante la lectura y sanción de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, los diputados firmantes dejamos expresa constancia de nuestro voto salvado por las siguientes consideraciones:

1. La Ley Orgánica del TSJ debía ser aprobada con **mayoría calificada** por ser una ley modificatoria de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución Nacional en el primer aparte, último párrafo del artículo 203 señala textualmente que *“esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas”*, es decir, las dos terceras partes de los diputados presentes al iniciarse la sesión.

Este proyecto de ley es una modificación de la actual ley de la CSJ por lo que conforme al artículo constitucional requería de una mayoría calificada para su aprobación. Al haber sido aprobada solo con una mayoría simple, la mayoría oficialista violó el procedimiento constitucional de formación de leyes. La previsión constitucional referida a una mayoría calificada para la modificación de las leyes orgánicas no es un capricho del constituyente, es la concreción del principio del pluralismo político y democrático. Así lo ha expresado en reiterados fallos la Sala Constitucional, en los siguientes términos: *“ crear un acuerdo sobre ciertos temas fundamentales relacionados con la institucionalidad estatal (organización de los órganos del Poder Público) y con el ejercicio legítimo de dicho Poder (derechos fundamentales) y evitar que cualquiera de estas materias de enorme trascendencia escapen o sean sustraídas a la discusión y al consenso de las eventuales mayorías legislativas ”* constituye el fundamento de la clasificación orgánica de las leyes.

2. La Constitución, en su artículo 209, dispone que todo informe contentivo de un proyecto de ley debe discutirse **artículo por artículo**. El Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en el artículo 138 establece que debe discutirse la denominación de cada título, capítulo y cada artículo. El Informe del proyecto de ley contenía más de ciento ochenta puntos que han debido ser discutidos cada uno de ellos por mandatos constitucionales y legales. El oficialismo en los primeros veintitrés puntos propuso la modificación de los artículos contenidos en el Informe realizando propuestas que redujeron el proyecto a 23 artículos y una disposición *“transitoria, derogatoria y final”*. Luego propuso suprimir en una sola modificación el resto de los puntos contenidos en el informe del proyecto de ley por considerar, falsamente, que todas las disposiciones a discutirse ya estaban contenidas en los artículos aprobados violando la Constitución que señala la obligación de discutir cada artículo del informe de manera separada. En caso de pretender su supresión debía hacerse en cada artículo y señalar en cual disposición aprobada había quedado recogido. Lo cierto es que varios artículos contenidos en el informe no fueron subsumidos en los artículos aprobados por el oficialismo. El oficialismo violó así el procedimiento constitucional y legal de formación de una ley.
3. El texto aprobado por la mayoría oficialista en su artículo 2, aumentó el número de magistrados en **doce adicionales** a los veinte que hoy constituyen la totalidad de los que integran el TSJ. Este número actual de magistrados fue establecido por la Asamblea Nacional Constituyente luego de aprobada la Constitución, como uno de los actos que se denominaron *“actos constituyentes”* a los que tanto la propia Constituyente como la Sala Constitucional del TSJ les dio rango constitucional. Al poseer ese rango, solo es posible modificar el número de

magistrados que integran cada Sala del TSJ por alguno de los mecanismos constitucionalmente previstos para modificar a la Constitución, por tanto, hacerlo mediante ley es nulo. Adicionalmente no existe justificación, ni la dio el oficialismo promotor de esta ley durante los debates, para el aumento del número de magistrados en todas las salas que integran el máximo tribunal del país, con lo cual se evidencia que la pretensión de aumentar el número de magistrados **sólo tiene motivaciones políticas para lograr el control absoluto del poder judicial venezolano** y colocarlo al servicio del poder ejecutivo nacional.

4. Todos los altos cargos designados por la Asamblea Nacional requieren de una mayoría calificada de dos tercios de los diputados. El artículo 264 constitucional guardó silencio respecto a los magistrados del TSJ. Ante esta omisión lo lógico era que la Ley del TSJ hubiera equiparado los requisitos de designación a lo previsto constitucionalmente para los otros cargos (de los Poderes Ciudadano y Electoral), pues todos revisten la misma jerarquía e importancia; pero el Poder Judicial es, en un Estado Democrático de Derecho, el gran guardián de la constitucionalidad de las actuaciones de los otros poderes. Ello hace imprescindible que sus integrantes cuenten con el mayor respaldo de las fuerzas políticas que integran el parlamento nacional para que se disminuyan los posibles errores *in eligendo*. Además, cualquiera que aspire a integrar un alto cargo en otro poder podrá exigir igual tratamiento que el que se le otorga a un magistrado y, en consecuencia, demandar y obtener la nulidad del artículo constitucional que exija dos tercios de diputados para su nombramiento, toda vez que atentaría contra el derecho a la igualdad y se estaría consagrando una grave discriminación.

El artículo 8 del texto aprobado por la mayoría oficialista señala que se convocará a una primera sesión para la designación de los magistrados con mayoría calificada de dos tercios de los diputados, pero si no se logran los votos en esa sesión o en dos sesiones adicionales convocadas al efecto, se convocará a una cuarta sesión en la cual será designados con la mayoría simple que tiene el gobierno en el parlamento. La aparente búsqueda de un acuerdo político para la designación de los magistrados con una mayoría calificada **se convierte así en una gran farsa** pues siempre la mayoría circunstancial que domine la conformación de la Asamblea Nacional, será en definitiva la que designará a los magistrados **sin tener que buscar los acuerdos con las minorías parlamentarias para lograr el máximo respaldo posible para tales designaciones**.

5. El artículo 264 constitucional dispone que la designación de los magistrados debe realizarse mediante la integración de un Comité de Postulaciones Judiciales, (dependiente del Poder Judicial e integrado por sectores de la sociedad), que recibirá las postulaciones y realizará una primera preselección, para que luego el Poder Ciudadano realice una segunda preselección y finalmente la Asamblea Nacional proceda a la designación de los magistrados en sesión plenaria. El texto aprobado por la mayoría oficialista dispone que el Comité de Postulaciones Judiciales **no dependerá del Poder Judicial sino de la Asamblea Nacional y lo integrarán diputados** junto a sectores de la sociedad **lo que constituye un secuestro del Comité** en violación directa de la disposición constitucional. Además contempla que el Poder Ciudadano en su segunda preselección puede **irrespetar la primera preselección de postulados realizada por el Comité de Postulaciones Judiciales y adicionar postulados no contemplados en ella** cuando realice su segunda preselección, **lo cual constituiría una primera selección** y no una segunda como lo establece de manera expresa la Constitución.
6. Los magistrados suplentes no serán designados por doce años como los principales conforme lo establece la Constitución (artículo 264) sino por dos años **con la mayoría**

simple que ejerce el gobierno en la Asamblea, por lo que todos los suplentes serán afectos al régimen y constituye otra forma de dominación y control del TSJ.

7. La Constitución establece en su artículo 336 numeral 1 que es función exclusiva y excluyente de la Sala Constitucional del TSJ el control jurisdiccional de los actos que dicte la Asamblea Nacional en ejecución directa e inmediata la Carta Magna. Los actos parlamentarios sin forma de ley sólo pueden ser anulados por la Sala Constitucional. Sin embargo la ley determinó, violando la Constitución, que la Asamblea puede, con el voto favorable de la *mayoría simple* de sus diputados, *anular los actos* mediante los cuales se produjo el nombramiento de los magistrados. Esta norma constituye ***una vulgar usurpación de funciones jurisdiccionales inadmisibles*** en un Estado con separación de poderes. Lo insólito está además es que la norma aprobada establece tres causales, la primera de ellas determinada por la presunta falsificación de datos de un magistrado cuando fue postulado referidos a sus credenciales para dar cumplimiento de los requisitos constitucionales, lo cual podría originar un juicio de nulidad por errores en el proceso de formación de se acto, mas no podría dar lugar a un acto anulatorio de quien produjo el nombramiento (Asamblea Nacional). Pero las ***otras dos causales ni siquiera guardan relación con el proceso de formación del acto de nombramiento o con el contenido mismo de dicho acto.*** Se refieren estas causales a la actitud pública que asuma un magistrado o cuando a juicio de la mayoría de los diputados atente contra el funcionamiento del TSJ, es decir, ***causales totalmente subjetivas y sobrevenidas, posteriores al acto de nombramiento que pretende anularse.***
8. La Constitución señala que la remoción de un magistrado del TSJ solo puede ser acordada con el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, previa la calificación de su actuación como falta grave por parte del Poder Ciudadano (artículo 265). El texto aprobado por la mayoría oficialista ***le otorgó al Poder Ciudadano la facultad de suspender a un magistrado en el ejercicio de su cargo*** hasta tanto la Asamblea Nacional acuerde con la mayoría calificada señalada en la Constitución su remoción. ***Esa suspensión no existe en la Constitución y constituye un fraude al procedimiento de remoción;*** es una remoción de hecho realizada por un poder incompetente para remover, pues el magistrado podría quedar por tiempo indefinido en ese limbo *suspendido* si en la Asamblea no se consiguen nunca los votos constitucionalmente requeridos para su destitución. Con esta regla pretende el gobierno dejar *suspendidos* a todos aquellos magistrados que no decidan conforme a lo que al régimen convenga y, lo que será aún más grave, pretenderán aplicar esta norma de forma retroactiva a aquellos magistrados que antes de su entrada en vigencia hubieren decidido un caso en contra de los intereses del Presidente Chávez.
9. Conforme a la Constitución, sólo el Presidente de la República y los diputados requieren de autorización parlamentaria cuando en Sala Plena del TSJ sea declarado con lugar el antejuicio de méritos en su contra (artículos 266 numeral 2 y 187 numeral 20). El resto de los funcionarios públicos contemplados en la norma Constitucional (Artículo 266 numeral 3 que se refiere a altos oficiales de la FAN, vice-presidente, miembros del Poder Ciudadano y Magistrados) una vez declarados los méritos para su enjuiciamiento, no requieren de autorización parlamentaria para la continuación del juicio. Sin embargo el texto aprobado por la mayoría oficialista ***les otorga la prerrogativa constitucional determinando que para continuar su enjuiciamiento se requiere de autorización parlamentaria una vez declarados los méritos para su enjuiciamiento por la Sala Plena del TSJ.*** Adicionalmente la Constitución otorga esa competencia a la Plenaria de la Asamblea

Nacional, sin embargo, el texto aprobado le otorga esa competencia también a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional dominada por el gobierno.

10. Solo la Sala Constitucional puede actuar de oficio por cuanto en los procesos que conoce no hay partes propiamente dichas ya que su competencia fundamental consiste en la interpretación de las normas constitucionales con carácter vinculante más allá de las partes. ***El texto aprobado permite que todas las salas puedan actuar de oficio, violando el debido proceso y la seguridad jurídica constitucionalmente protegidos.***
11. El texto aprobado no contiene división de títulos, capulitos, denominación de los artículos; los artículos contienen innumerables párrafos en los cuales se mezclan diversa materias, por lo que toda la ley carece de las más elementales reglas de técnica legislativa y lo convierten en un texto legal difícil comprensión.
12. El informe contentivo del texto de la ley presentado a plenaria para su lectura presenta modificaciones respecto al texto de varios artículos aprobados por la mayoría oficialista en segunda discusión. El artículo 5 fue modificado en varios de sus numerales, algunos incluso fueron suprimidos y otros sustituidos por numerales totalmente distintos a los aprobados por la plenaria en segunda discusión. Igual sucedió con el artículo 6 en el cual también se suprimieron, sustituyeron y modificaron numerales. Lo mismo se repite en el artículo 12. El artículo 14 contiene una modificación completa del procedimiento de postulación y designación de nuevos magistrados respecto al procedimiento aprobado en segunda discusión. Todos estos cambios no aprobados en plenaria en segunda discusión por la Asamblea Nacional, constituyen una violación al artículo 209 constitucional.

Expresamos mediante este escrito nuestra protesta y no conformidad con la ilegal e inconstitucional aprobación que la mayoría oficialista ha realizado del referido texto legal y, en consecuencia, por las razones expuestas **salvamos nuestro voto** ante la aprobación de esta ley que solo pretende que el Poder Ejecutivo Nacional controle de manera abierta al Poder Judicial venezolano para convertirlo en su aparato represivo con apariencia de legalidad.

En Caracas a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2004.

Los Diputados firmantes

(Diputados de Primero Justicia, AD, Copei, Convergencia, Proyecto Venezuela, Nuevo Tiempo, Causa R, Solidaridad y MAS)¹⁷⁵

¹⁷⁵ www.globovision.com

Bibliografía

BREWER-CARIÁS, ALLAN R.: “*Instituciones Políticas y Constitucionales*”. Tomo I: “*El régimen histórico-constitucional del Estado*”. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas – San Cristóbal, 1996. 715 p. (6).

BREWER-CARIAS, Allan: “*Instituciones Políticas y Constitucionales*”. Tomo III: “*El Poder Nacional y el sistema democrático*”. Editorial Jurídica Venezolana, Universidad Católica del Táchira, Caracas-San Cristóbal. (8).

CASAL H., Jesús María: “*La Facultad Revisora de la Sala Constitucional prevista en el numeral 10 del Artículo 336 de la Constitución*”, en Revista de Derecho Constitucional N° 3, julio-diciembre 2000, Editorial Sherwood, Caracas, p. 267-283.

LA ROCHE, Humberto: “*Derecho Constitucional*”, Universidad del Zulia, Maracaibo, 1970, 410 p.

MOLINA GALICIA, René: “*Reflexiones sobre una visión constitucional del proceso, y su tendencia jurisprudencia*”, Ediciones Paredes, Caracas 2002, 311 p.

OROPEZA, Ambrosio: “*La Nueva Constitución Venezolana de 1961*”, Editorial Panapo, Caracas 1992 p. 486.

PETZOLD PERNÍA, Hermann: “*El TSJ y el avocamiento*”, Diario La Verdad de Maracaibo del 23.03.04.

PETZOLD PERNÍA, Hermann: “*La noción de igualdad en el Derecho de algunos Estados de América Latina*”, LUZ, 1974.

RENGEL-ROMBERG, Aristides: “*La Profesionalización de los Jueces*”, Autolitho, C.A., Caracas, 2006, 336.

SARMIENTO SOSA, Carlos J.: “*La Justicia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*”, Vadell Hermanos Editores, Caracas 2000, 330 p.

Legislación

“*Código de Procedimiento Civil*”, G.O. N° 4.209 Ext. del 18.09.1990.

“*Código Orgánico de Justicia Militar*”. G.O. N° 5.263 Ext. del 17.09.1998.

“*Código Orgánico Procesal Penal*”, G.O. N° 5.894 Ext. del 26.08.2008.

“*Código Penal*”, G.O. N° 5.763 del 16.03.05, reformado en G.O. N° 5.767 del 13.04.05.

“*Constituciones Latinoamericanas*”, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 1997, 963 p.

“*Decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición de los Poderes Públicos*”, G.O. N° 36.857 del 27.12.99 reimpresso en G.O. N° 36.859 del 29.12.1999 y en G.O. N° 36.920 del 28.03.00.

“Decreto N° 6.239 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, G.O. N° 5.891 Ext. del 31.07.08.

“Exposición de Motivos. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, G.O. N° 5.453 Ext. del 24.03.00.

“Las Constituciones de Venezuela”, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 1997, p. 1210.

“Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos”, G.O. N° 31.256 del 14.06.1977.

“Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”, G.O. N° 2.146 Ext. del 28.01.1978.

“Ley contra la Corrupción” G.O. N° 5.637 Ext. del 07.04.03

“Ley de Arbitraje Comercial”, G.O. N° 36.430 del 07.04.1998

“Ley de Carrera Judicial”, G.O. N° 5.262 del 11.09.1998.

“Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social”, G.O. N° 37.475 del 01.07.02.

“Ley del Régimen Penitenciario”, G.O. N° 36.975 del 19.06.00.

“Ley N° 5. Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios del Poder Ciudadano y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para su Primer Período Constitucional.”
G.O. N° 37.077 del 14.11.00.

“Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”, G.O. N° 33.891 del 22.01.1988.

“Ley Orgánica de Justicia de Paz”, G.O. N° 4.817 Ext. del 21.12.1994.

“Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”, G.O. N° 1.893 Ext. del 30.07.1976.

“Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz”, G.O. N° 4.634 Ext. del 22.09.1993.

“Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura”, G.O. N° 5.262 Ext. del 11.09.1998.

“Ley Orgánica del Poder Ciudadano”, G.O. N° 37.310 del 25.10.01.

“Ley Orgánica del Poder Electoral”, G.O. N° 37.573 del 19.11.02.

“Ley Orgánica del Poder Judicial”, G.O. N° 5.262 Ext. del 11.09.1998.

“Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”, G.O. N° 37.942 del 20.05.04.

“Ley Orgánica sobre Estados de Excepción”, G.O. N° 37.261 del 15.08.01.

“Ordenanza para la Promoción y el establecimiento de la Justicia de Paz en el Municipio Maracaibo”, G.M. N° 256 del 08.12.00.

Jurisprudencia

“Sentencia N° 0001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 20.01.00” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/01-200100-00-002.

“Sentencia N° 1819 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 08.08.00” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/01819-080800-0806.

“Sentencia N° 1077 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 22.09.00” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Septiembre/1077-220900-00-1289

“Sentencia N° 1074 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 27.09.00” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Septiembre/1074-190900-00-1136.

“Sentencia N° 1562 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 12.12.00” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1562-121200-00-3035.

“Sentencia N° 0077 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 30.01.01” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/77-300101-00-1599.

“Sentencia N° 0750 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 23.10.01” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Octubre/750-231001-CC010687.

“Sentencia N° 2353 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 23.11.01” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/2353-231101-00-2517.

“Sentencia N° 0551 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 17.03.03” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Marzo/551-170303-02-8865.

“Sentencia N° 2073 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 04.08.03” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/2073-040803-03-1254.

“Sentencia N° 2341 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 25.08.03” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/2341-250803-03-1254.

“Sentencia N° 3118 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 06.11.03” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/3118-061103-03-1167.

“Sentencia N° 0347 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 16.03.04” en www.tsj.org.ve.sc/decisiones/scon/Abril/0347-160304-04-0475

“Sentencia N° 1168 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 15.06.04” en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1168-150604-03-1745.

“Sentencia N° 1.057 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 01.06.05” en G.O. N° 38.214 del 22.06.05.

“Sentencia N° 1.793 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 19.07.05”, en G.O. N° 38.249 del 12.08.05.

“Sentencia N° 1.048 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 18.05.06”, en www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1048-180506-05-0801.

Otros

Diario El Universal

27.01.06,

01.02.06, Lamentan que jueces griten: “¡UH, AH, Chávez no se va!”.

25.05.06, “Blyde: Se le aplico la norma a quien fue su artífice y su defensor”.

08.06.06, “Acto del concejo moral acepta amparo”.

14.06.06 “¿Justicia o ajusticiamiento de Velásquez Alvaray?”.

PROVEA “Informe Anual 2004-2005”,
www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004-05/index.HTM.

Consultar en

PROVEA “Informe Anual 2004-2005”,
www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2006-07/index.HTM

Consultar en

www.Globovision.com

rdb/febrero 2007